

RESUMEN EJECUTIVO

La pandemia de la COVID-19 ha llegado con el trasfondo preexistente de perspectivas mundiales de crecimiento lento, con bajas tasas de inflación y de interés nominales. La pandemia ha hecho que la adopción de medidas de política fiscal sea más necesaria que nunca. La presente edición del informe *Monitor Fiscal* analiza el papel de la política fiscal a la hora de salvar vidas, proteger a las personas y empresas más afectadas por la pérdida de ingresos, el desempleo y las quiebras, y reducir la posibilidad de que la pandemia provoque un desplome económico profundo y duradero.

El costo humano de la pandemia se ha intensificado a un ritmo alarmante, y se prevé que el impacto sobre el producto y las finanzas públicas sea devastador. Las respuestas de los gobiernos deben ser rápidas, concertadas y proporcionales a la gravedad de la crisis sanitaria, asignando una importancia crucial a las herramientas fiscales. La primera prioridad, salvar vidas, requiere satisfacer plenamente el gasto en pruebas de detección y tratamientos, lo que exige coordinación a escala internacional; esta coordinación debe incluir el apoyo a países con una capacidad sanitaria limitada mediante donaciones y financiamiento concesionario, así como el desarrollo de una vacuna de alcance universal y de bajo costo. Para salvar vidas también es necesario el distanciamiento social —un elemento fundamental de protección colectiva tanto a nivel nacional como mundial—; este distanciamiento impone costos aun mayores debido a la reducción del producto, la disminución de los ingresos tributarios y la necesidad de proteger a las personas y empresas más afectadas. Esto puede lograrse mediante medidas amplias, oportunas, temporales y focalizadas, como licencias médicas y familiares remuneradas y financiadas por el gobierno, transferencias, prestaciones por desempleo, subsidios salariales y aplazamiento del pago de impuestos. Asimismo, la inyección de liquidez a las empresas puede reducir el riesgo de quiebras.

El brote de la COVID-19 y sus consecuencias económicas y financieras causarán un gran aumento de los déficits fiscales y los coeficientes de endeudamiento público, en comparación con proyecciones anteriores. La reducción del producto provocará una caída incluso más brusca de los ingresos públicos (en comparación con la proyección del informe *Monitor Fiscal* de octubre de 2019, en el escenario base para 2020 se prevé una disminución de los ingresos de un 2,5% del PIB mundial). El necesario gasto sanitario, así como las medidas tributarias y de gasto en apoyo de particulares y empresas, también tendrán costos fiscales directos, que actualmente se estiman en USD 3,3 billones a nivel mundial. Además, aunque las aportaciones de capital y los préstamos del sector público (USD 1,8 billones), así como las garantías y otros pasivos contingentes (USD 2,7 billones), pueden apoyar a las empresas financieras y no financieras, también generan riesgos fiscales.

En base a las respuestas de política económica hasta la fecha, se prevé que los balances fiscales en 2020 se deterioren en prácticamente todos los países, y se estiman aumentos considerables en *Estados Unidos*, *China* y varias economías europeas así como en algunas economías asiáticas. Si bien este año para muchos países es necesario y apropiado un aumento sustancial del déficit, en algunos casos el nivel del déficit ya presenta vulnerabilidades (la deuda pública a escala mundial fue del 83% del PIB en 2019). La situación es más preocupante para las economías de mercados emergentes y en desarrollo que se enfrentan a múltiples shocks, entre ellos la pandemia, un deterioro brusco de las condiciones de financiamiento, una demanda externa débil y, en el caso de los exportadores de materias primas, un descenso de los precios de las materias primas. Incluso tras los esfuerzos de la comunidad internacional por aliviar estas limitaciones de financiamiento, estos países necesitarán reordenar las prioridades de gasto hacia el sector sanitario, y al mismo tiempo preservar los principales servicios públicos (transporte, energía, comunicaciones) y la protección social.

En estos momentos, la magnitud del impacto de la COVID-19 sobre las finanzas públicas es muy incierta y dependerá no solo de la duración de la pandemia, sino también de si la recuperación económica es rápida o si la crisis proyecta una larga sombra. En un contexto en que el sector público debe proporcionar ayuda en una escala extraordinaria, entre otras formas mediante instrumentos como préstamos y garantías, la transparencia es fundamental para gestionar los riesgos fiscales. A medida que los países contengan la pandemia y termine la paralización, la aplicación de un estímulo fiscal coordinado y de amplio alcance —en función de las limitaciones de financiamiento de los países— será una herramienta más eficaz para impulsar la recuperación. También será apropiado el abandono de las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis. Una vez que las economías se recuperen, será necesario lograr avances hacia la sostenibilidad la deuda.